La posverdad y su impunidad



Por Gabriel Palma Garrido*

A estas alturas del partido, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre está sobreanalizado, sobreinterpretado y sobreentendido. La inevitable realidad plasmada en la respuesta ciudadana de las urnas fue un remezón del cual aún el oficialismo (y el gobierno) se intenta recuperar.

Como ya es sabido, las intenciones de la oposición eran generar un nuevo proceso de diálogo para avanzar en una propuesta constitucional que se adaptara mejor a las problemáticas presentes en el día a día de la sociedad chilena actual. Sin embargo, por razones que muchos no logran entender, las conversaciones relacionadas a la nueva carta magna se han estancado. Y es que después de solo dos meses desde los comicios, los egos triunfalistas se tomaron la agenda opositora. Para ellos es coherente adoptar una postura demandante debido a las reiteradas ocasiones en que la izquierda se cuadró para hacerles imposible la gobernabilidad, pero para el resto es evidente que aquella estrategia terminará siendo un temporizador para la credibilidad política de la derecha.

Más allá de eso, el análisis del proceso constitucional concluyó que gran parte de la responsabilidad recae en la pobre gestión demostrada por la misma convención. Graves faltas de organización interna, como la renuncia de la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la convención Lorena Penjean, lanzando duras críticas a la

* Estudiante de tercer año de Periodismo de la Universidad de Chile, periodista y miembro del equipo editorial de Iniciativa Laicista.

> *Todo esto nos lleva a entender la posverdad como la distorsión deliberada de la realidad, haciendo que los hechos objetivos y verosímiles tengan menos influencia en definir la opinión pública que aquellos que apelan a la emocionalidad y creencias de las personas.*

mesa directiva; o los fuertes encontronazos entre convencionales de un mismo sector; y ni hablar de los bochornos puertas adentro (y puertas afuera). El fracaso del proceso se veía como una posibilidad, a lo menos, realista. Nadie lo presupuestaba con ese nivel de margen, ni las encuestas más extremistas, y pese a ello, la realidad fue tajante.

Pero aún así, hay una arista que poco se ha dimensionado en cuanto a su impacto sobre el desenlace de todo este período: las *fake news* y el rol de los medios de comunicación.

Convivir con la posverdad

La posverdad no es un fenómeno nuevo. Fue planteado por primera vez por el dramaturgo Steve Tesich en 1992 en el marco de un artículo sobre la Guerra del Golfo Pérsico. Tesich aseveraba: "Lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un mundo en donde reina la posverdad."

Por su parte, el filósofo británico Anthony Crayling asegura que la posverdad tiene su origen contemporáneo en la crisis económica del 2008, época que provocó la exaltación sobre temas como la inmigración, la política entre otros fenómenos.

Todo esto nos lleva a entender la posverdad como la distorsión deliberada de la realidad, haciendo que los hechos objetivos y verosímiles tengan menos influencia en definir la opinión pública que aquellos que apelan a la emocionalidad y creencias de las personas.

La posverdad ha tenido una escalada muy acelerada, siendo la causa principal la fuerte proliferación de las redes sociales en las últimas dos décadas. El hecho de que uno de los requerimientos principales de la posverdad es que necesita de una difusión rápida y con la menor cantidad de intermediarios posibles hace que las redes sociales sean su nicho predilecto. Según un estudio del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, para el 2018 el 75% de las personas usuarias de redes sociales se topaban con información maliciosa al menos 4 veces por día. Considerando la cantidad de usuarios que tenía Facebook (la red social más popular a la fecha) para ese año, casi 1.700 millones de cuentas activas por mes, podemos hacer un cálculo sencillo y determinar que se visualizaban aproximadamente 227 millones de informaciones fraudulentas al día durante 2018. Ese número se ha incrementado, sin lugar a dudas.

Ante un crecimiento tan exponencial como este, lo lógico sería que se estén tomando cartas en el asunto para hacerle frente a un fenómeno tan perjudicial como lo es la posverdad y las noticias falsas, ¿cierto?

¿Quién se hace cargo?

Hace solo unos cuantos años, no más de 3 o 4, surgieron en Chile las llamadas iniciativas de *fact-checking*, grupos de profesionales ligados a las comunicaciones que se dedican a confirmar o desmentir informaciones que circulan por las redes. Sin embargo como podrá intuir, la tarea es titánica.

Con esto trato de decir que, salvo estos grupos que reciben financiamiento mensual gracias a

mecenas digitales u ocasiones puntuales en las que los medios de comunicación no les queda otra más que desmentir un hecho absurdamente falso, nadie se hace realmente cargo de la lucha contra la desinformación, nadie se ha puesto la camiseta en esta cruzada crucial (nadie que tenga los medios y el deber moral de hacerlo).

Hace unas semanas el periodista Daniel Matamala planteaba: "No estamos haciendo nuestro trabajo como periodistas cuando llamamos 'polémicas' a las maquinarias de *fake news*, 'opiniones' a las mentiras y 'controversias' a los engaños."

Y es cierto. Si volvemos al tema que tratamos al inicio sobre las responsabilidades en el proceso constituyente, no se puede dejar de lado a los medios de comunicación, los mismos que vienen siendo cuestionados (por lo bajo) desde el 2019 y su cobertura de los hechos durante el estallido social.

Es impensable que en un ecosistema informativo sano se otorguen espacios para que sujetos con intereses a lo menos cuestionables se planten frente a un periodista y formulen ideas mediana o derechamente tergiversadas, con interpretaciones rebuscadas e irreales, con contextos irrisorios, y que no sean refutados por ello.

En la jerga periodística se dejó de usar el término de "la verdad", sino que ahora se habla de "lo verídico", pues es más factible construir un relato verídico en base a distintos puntos de vista que establecer una verdad única y absoluta, un concepto más bien distópico y poco práctico. Pero de ahí a delimitar que un relato debe ser tomado en cuenta como parte de la reconstrucción de un hecho, por más ridículo y/u ofensivo que pueda ser, escudándose en la libertad de expresión, hay una brecha considerable.

El peligro de no hacerse cargo

El gran problema de dejar que la maquinaria de falsedades se tome la palestra pública sin consecuencias ni remordimientos es la desconfianza que se genera en el colectivo social. La gente reacciona no creyendo en nada, o bien creyendo en todo lo que ve. El pensamiento crítico de las personas se ha ido corrompiendo por quién sabe qué otros motivos además de los ya mencionados relacionados a la posverdad y al desinformación, pero eso es materia de otro artículo.



Lo cierto es que el escepticismo es tremendamente peligroso para la democracia. El no confiar en aquellos que nos ofrecen la información es desconfiar en aquellos que las emanan (los políticos, que por cierto están tan desprestigiados como los medios de comunicación). Esto es un caldo de cultivo ideal para las ideas populistas y autocráticas "salvadoras de una sociedad devastada como la nuestra, por culpa de los desconsiderados de siempre".

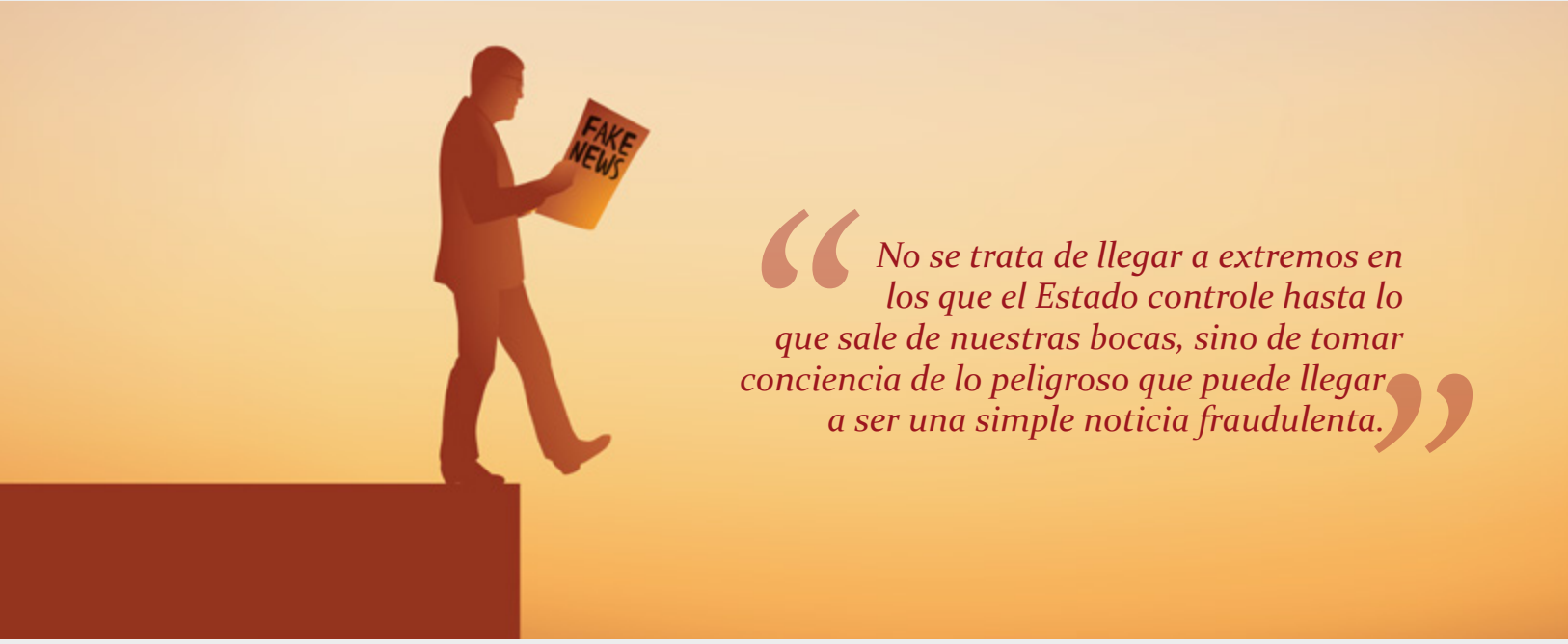
Y al final del día, no podemos culpar a la gente por verse expuestos inevitablemente a las informaciones maliciosas y las/los rebeldes malintencionados. La crítica se puede hacer, pues son las personas quienes deciden en qué creer y en qué no, pero la responsabilidad de permitir que parte de las opciones venga contaminada con algún sesgo es netamente de la legislación y de aquellos que controlan qué opciones se ofrecerán.

En algunos momentos de la historia contemporánea de nuestro país, posdictadura, se intentó formular una ley de medios de comunicación, pero la discusión se volvió álgida en ciertos momentos de su tramitación. No hablo de promulgar una ley que imponga límites en los que pueda operar un medio, censurándolo constantemente si su línea editorial no se condice con los ideales políticos del gobierno de turno, pero sí que sea capaz de marcar diferenciaciones entre lo que es la versión de algún hecho y lo que es derechamente falso. También es importante que la ley establezca un mecanismo que identifique las intenciones de esta propagación de información adulterada. Ahora mismo es utópico, pero la línea se debería trazar en ese rumbo si es que los mismos medios no son capaces de tomar las riendas.

No se trata de llegar a extremos en los que el Estado controle hasta lo que sale de nuestras bocas, sino de tomar conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser una simple noticia fraudulenta.

Ya hemos visto los casos del Reino Unido y de Estados Unidos, quienes sucumbieron ante esta nueva ideología de la desinformación. Chile aún tiene tiempo de enrielar su destino, pero no se puede esperar hasta el 2025 ni 2030, ya sería demasiado tarde.

El país tiene el desafío de combatir a como dé lugar este creciente y alarmante fenómeno, y lo que necesitamos todos es que alguien se haga cargo de manera efectiva de esta lucha, porque no somos nosotros los que nos acercamos al un enemigo implacable, es el mismo enemigo, la posverdad, quien viene corriendo hacia nosotros.



"No se trata de llegar a extremos en los que el Estado controle hasta lo que sale de nuestras bocas, sino de tomar conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser una simple noticia fraudulenta."